

Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980

Desafíos en el abordaje
del pasado reciente en la Argentina 1



Daniel Lvovich
(compilador)

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

POLÍTICAS PÚBLICAS, TRADICIONES POLÍTICAS Y SOCIABILIDADES
ENTRE 1960 Y 1980

Daniel Lvovich (compilador)

**Políticas públicas, tradiciones políticas
y sociabilidades entre 1960 y 1980**
Desafíos en el abordaje del pasado
reciente en la Argentina 1

Guadalupe Ballester, Juan Luis Besoky, Ernesto Bohoslavsky,
Gabriela Gomes, Federico Iglesias, Daniel Lvovich, César Mónaco,
Sergio Daniel Morresi, Florencia Osuna, Cristian Vázquez
y Martín Vicente

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980 : desafíos en el abordaje del pasado reciente en la Argentina 1 / Guadalupe Anahi Ballester.. [et al.] ; compilado por Daniel Lvovich.- 1a ed.- Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020.
286 p. ; 21 x 15 cm. - (Humanidades ; 43)

ISBN 978-987-630-449-8

1. Estado. 2. Sociedades. 3. Historia Política Argentina. I. Ballester, Guadalupe Anahi. II. Lvovich, Daniel, comp.
CDD 320.0982

AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA



EDICIONES **UNGS**

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020
J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX)
Prov. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4469-7507
ediciones@campus.ungs.edu.ar
ediciones.ungs.edu.ar

Diseño gráfico de colección: Andrés Espinosa
Diagramación: Eleonora Silva
Corrección: María Valle

Hecho el depósito que marca la Ley 11723
Prohibida su reproducción total o parcial
Derechos reservados



Libro
Universitario
Argentino

Índice

Introducción 9

Primera parte. Políticas públicas en tiempos dictatoriales

Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría del Menor y la Familia en la historia argentina reciente 17
Florencia Osuna

Actores transnacionales y proyectos de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973)* 43
Gabriela Gomes

El rol del INTA en la conformación de la organización campesina en Formosa durante la década del sesenta 75
Cristian Eduardo Vázquez

Las ciencias sociales y los estudios de opinión pública en la llamada “Revolución Argentina” 97
Daniel Lvovich

Segunda parte. Tradiciones políticas e intelectuales de las derechas

Los congresos anticomunistas en la Argentina: redes y sociabilidades latinoamericanas y globales en los años sesenta 121
Ernesto Bohoslavsky

Violencia paraestatal en el Gran La Plata (1973-1976): el caso de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) 143
Juan Luis Besoky

Los rostros del liberalismo-conservador: polémicas en torno de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía procesista 171
Sergio Daniel Morresi y Martín Vicente

Tercera parte. Sociabilidades, asociacionismos y micropolítica

Un acercamiento a las dinámicas de subsidiariedad del Estado a escala local. General Sarmiento, 1973-1983	205
<i>Guadalupe Ballester</i>	
Escritores y dictadura: trayectorias, prácticas y sociabilidades. El caso de la revista literaria <i>El Ornitorrinco</i> , 1977-1983.....	231
<i>Federico Iglesias</i>	
Sindicalismo y política. El lugar de la UOM en el escenario público nicoleño, 1972-1973	259
<i>César Mónaco</i>	
Autoras y autores	283

Las ciencias sociales y los estudios de opinión pública en la llamada “Revolución Argentina”

Daniel Lvovich

La indagación que presentamos aquí forma parte de una preocupación intelectual más amplia, que reside en intentar comprender los modos en que los regímenes autoritarios se vinculan con las sociedades, las maneras en que buscan construir consensos y adhesiones y los instrumentos a través de los que buscan no solo conocer la opinión de la población, sino también influir sobre la construcción de esa opinión.

Para abordar esta problemática, en este texto buscamos dar cuenta de dos cuestiones íntimamente vinculadas. Por un lado, consideraremos la incorporación por parte de ciertas agencias del Estado argentino, bajo un gobierno dictatorial, del uso de las encuestas de opinión pública, resultado a su vez de la renovación de las ciencias sociales desplegada desde la década de 1950; y por otro, el modo en que, en esos instrumentos, se considera la aceptación o el rechazo de las políticas desplegadas por el gobierno militar instalado desde junio de 1966. Necesariamente, ello nos conduce a los modos en que son construidos e interpretados los datos obtenidos con esos métodos, tanto en su época cuanto en los análisis posteriores.

Abordamos parte de estas cuestiones al encontrarnos, gracias a la generosidad de dos colegas que lo hallaron en el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, con un documento excepcional.¹ Nos referimos al análisis de la encuesta piloto de opinión pública desarrollada en junio de 1970 en Rosario y Santa Fe, respectivamente la principal ciudad y la capital de la provincia del mismo nombre, realizada por el Servicio de Encuestas de Opinión Pública.

¹ Agradezco la generosidad de Laura Schenquer y Julia Risler. El Archivo Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y creado en 2006, está compuesto principalmente por la documentación perteneciente a la ex Dirección General de Informaciones, un organismo de inteligencia que funcionó entre 1966 y principios de la década de 1990 en la órbita del Gobierno de Santa Fe.

Este documento nos permite aproximarnos a las problemáticas señaladas, con más dudas que certezas, pero sobre la base de una información empírica hasta ahora desconocida. Se trata, además, de uno de los documentos de esta naturaleza más completos de los que se disponen en la Argentina, que nos permite reconstruir en parte el modo en que se diseñó la encuesta y cuáles eran sus objetivos. Sabemos, gracias a este documento, el papel que cumplió la Secretaría de Informaciones del Estado en su impulso y desarrollo, la articulación que pretendía lograr con las distintas áreas del Estado nacional, la confirmación de que el conocimiento de la opinión de la población resultaba un insumo necesario para la orientación de las políticas, incluso en aquel período dictatorial. También podemos confirmar, a través de ese texto, la vinculación que se buscó desde las áreas del Estado —que pretendían conocer e influir sobre la opinión pública— con las instituciones universitarias dedicadas a la investigación social. En este sentido, este caso contribuye a mostrar un vínculo no demasiado advertido hasta el momento entre la modernización de las ciencias sociales y el empleo de sus procedimientos, métodos y resultados por agencias del Estado en períodos dictatoriales.

Realizaremos el abordaje de estos objetos a través de la articulación de diversas capas de indagación, que hacen a su vez necesario emplear diversas escalas espaciales y temporales de observación. La historia de las ciencias sociales aplicadas a las encuestas de opinión y la de su articulación con agencias estatales no puede sino observarse en una temporalidad de varias décadas y en una escala nacional que se articula con el desarrollo de la sociología en los principales centros académicos de Occidente. Por su lado, la encuesta santafesina nos lleva a considerar un acontecimiento temporalmente acotado, en una escala local, que se vincula necesariamente con la nacional.

Nuestro trabajo se dedica a una relación específica entre el Estado y la sociedad: la del despliegue de una voluntad estatal de conocimiento sobre lo social, no ya dependiente del espionaje o las delaciones, sino de la aplicación de los métodos de las modernas ciencias sociales a la generación de ese saber. Entre estos métodos, las encuestas de opinión pública han recibido fuertes críticas, ya que se presentaron objeciones a la toma descontextualizada de datos en los que se basan y a que generan una apariencia de agregación de opiniones individuales que, en realidad, solo existe como resultado de las operaciones de los encuestadores. También se ha destacado la influencia del modo en que son formuladas las preguntas y las opciones para condicionar las repuestas y, particularmente, Pierre Bourdieu (2000) dedicó a la misma noción de *opinión*

pública una crítica fundamental, que considera, entre otras cosas, el modo en que su vez las encuestas configuran la opinión de la población.

Aun compartiendo buena parte de estas críticas y observaciones, entendemos que estos trabajos brindan orientaciones importantes para una comprensión –siempre aproximativa– de los fenómenos de la opinión pública por parte del historiador. Debe ser esta una comprensión que, a partir de la idea de que en las encuestas opera necesariamente la orientación y tendencias de los que las diseñan y desarrollan, considere estos elementos como un dato que debe ser conocido y sometido a crítica, pero que no invalida el método en su totalidad. Es tarea del historiador que analiza estos instrumentos considerar siempre los elementos contextuales, así como las disparidades regionales, de clase y género que se expresan en diferencias, en ocasiones, muy profundas. Pero a la vez, se debe tener en cuenta que cierta regularidad y persistencia de los datos –como los que encontraremos en el conjunto de los casos considerados– aporta robustez para la construcción del conocimiento

Las encuestas de opinión pública: una breve introducción a su historia en la Argentina

Frente a la rápida expansión de la encuesta como método de investigación social en Europa, en las décadas de 1950 y 1960, la evolución de los estudios de opinión pública en América Latina resultó algo más tardía, ya que se desarrolló en un momento “en que la innovación técnica alcanza el grado de solidez y estandarización suficiente para industrializarse y orientarse a fines comerciales.” (Daniel, 2013: 11).

Desde comienzos de la década de 1940, miembros del Instituto de Sociología de la UBA se vincularon con el Instituto Americano de la Opinión Pública, dirigido por George Gallup (Morales, 2013). En el primer número del *Boletín del Instituto de Sociología* de la UBA, en 1942, se manifestó la idea de crear un Instituto de Opinión Pública adaptando el modelo de Gallup a la realidad argentina, iniciativa que no llegó a plasmarse. Para 1956 se registra la existencia, en el ámbito privado, de un Instituto Argentino de Opinión Pública, dirigido por Alfredo Infante, que en 1957 desarrolló una investigación sobre hábitos y preferencias de los porteños en relación con los diarios, con una muestra de más de seis mil casos. En 1960, el Instituto desarrolló estudios sobre las elecciones realizadas ese año en los Estados Unidos y en la Argentina (Shoai, 2011: 1-2).

El uso de esta herramienta se expandió a lo largo de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, proliferación que se debió al interés profesional y comercial de abrir un mercado de encuestas de opinión pública, que tenía como antecedente a las empresas de investigación de mercado (Daniel, 2013: 111; Vommaro, 2008: 72). En 1959, se creó en Buenos Aires el Instituto de Psicología Social Aplicada (IPSA), empresa de estudios de mercado, y en la década siguiente, se desarrollaron nuevas empresas de marketing como A&C –que hizo encuestas políticas para el gobierno militar establecido en 1966– y una filial del Instituto Gallup, aunque dedicado a los estudios de mercado.

De modo simultáneo, se desarrollaron instituciones e iniciativas destinadas a auscultar específicamente la opinión pública. José Miguens, sociólogo católico de larga trayectoria intelectual y política, creador y primer director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina, tuvo un rol destacadísimo en este aspecto. Miguens trabajó en la primera encuesta de opinión pública de 1958, que inauguraría una serie de estudios realizados por el sociólogo para la Secretaría de Informaciones del Estado de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Miguens ejecutó estos trabajos desde el Centro de Investigaciones Motivacionales, el Centro Argentino de Encuestas y el Instituto Lanús. Sin embargo, según recordaba Manuel Mora y Araujo –uno de los más destacados encuestadores del período, sociólogo por la UBA de importante trayectoria académica y como consultor– no había un real interés en el Estado durante los años del desarrollismo por construir un conocimiento empíricamente informado de la opinión pública, por lo que las investigaciones de Miguens resultaron más un producto de sus vinculaciones con funcionarios de la Secretaría de Informaciones que de un interés estatal sostenido (Shoai, 2011: 4 y 8).

Junto a esto, diversos intelectuales realizaron, en ocasiones, encuestas de opinión desde la década de 1960. Justamente, Manuel Mora y Araujo realizó su primera encuesta política en 1965 para el dirigente peronista Antonio Cafiero, aunque se trató de un trabajo puntual y no de una investigación sistemática. También el sociólogo, militante de la nueva izquierda y experto en comunicación, Heriberto Muraro, recordaba haber realizado encuestas de opinión pública en la época del presidente Arturo Illia (1963-1966), pero cuando el golpe militar de 1966 clausuró las vías democráticas, volvió a dedicarse a las encuestas comerciales (Vommaro, 2008).²

² Sobre la figura de Muraro puede consultarse Zarowsky (2016).

Los trabajos y el rol institucional de Gino Germani también resultaron determinantes para la extensión de la aplicación sistemática de encuestas de opinión. Tras el golpe de Estado de 1955, Germani se desempeñó como director de la carrera de Sociología y del Departamento de Sociología de la UBA, creados en 1957. En tales funciones, Germani fue una figura clave del pronunciado proceso de modernización cultural y académico que atravesó la Argentina entre 1955 y 1966 (Blanco, 2006; Terán, 1991: 3 y ss.). Desde 1957, Germani dirigió, entre otros, el proyecto de investigación “Etnocentrismo y actitudes autoritarias”, basado en un muy extenso trabajo de campo. Sin embargo, a Germani le importaba menos dar cuenta de las fluctuaciones de la opinión pública que explicar las actitudes autoritarias y, en definitiva, intentar exponer los rasgos básicos de la estructura misma de la sociedad argentina (Shoai, 2011: 5).

Se ha señalado que la asociación de las encuestas de opinión pública con los principios democráticos y las libertades individuales pertenece al momento mismo de la emergencia pública de los sondeos como una innovación técnica, en la defensa y justificación de la herramienta que hizo su primer promotor, George Gallup (Daniel, 2013: 109). Sin embargo, podemos sostener que, para el caso argentino, la ampliación del uso de estas técnicas y, sobre todo, la vocación estatal de recoger datos de opinión a través de este medio se verificará en el contexto de la autodenominada “Revolución Argentina”, dictadura militar que, con distintas etapas y liderazgos, se desarrolló entre 1966 y 1973. De hecho, la primera gran experiencia de la firma A&C fue una compulsiva efectuada el 30 de junio de 1966, para calibrar el apoyo de la población al régimen militar recientemente instaurado (Vommaro, 2008: 45).

Guillermo O’Donnell ha considerado esa encuesta en uno de sus textos principales, gracias a lo que podemos acceder a un conocimiento, aunque somero, de ella. Las respuestas a esta encuesta muestran que el 66% de los encuestados aprobaban el régimen militar explícitamente y solo el 6% se oponía a él. En la misma encuesta, el 73% expresó que creía que la situación mejoraría, el 17% que seguiría igual y solo el 9% que empeoraría. Por el pequeño número de encuestados y la imprecisa información sobre el método empleado, O’Donnell (1996: 65-66) sugería tomar estos datos con cautela.³

Exactamente dos años más tarde, y cuando las transformaciones sociales y económicas introducidas por la dictadura habían generado un malestar no siempre visible, la revista *Primera Plana* le encargó a la misma empresa A&C

³ Según otra encuesta, 77% de los entrevistados respondió afirmativamente a la pregunta “¿Cree usted que la revolución del 28 de junio fue necesaria?”, *Correo de la tarde*, 6-12/6/1967 (mil entrevistados en la ciudad de Buenos Aires, metodología no informada).

un sondeo de opinión pública sobre el régimen de Onganía.⁴ La metodología de la encuesta, la zona geográfica en que se aplicó y el tamaño de la muestra no fueron informados. Los resultados publicados daban cuenta del desgaste del régimen dictatorial: el 60% de los consultados no asignaba “nada bueno” al gobierno de Onganía y para el 70% de los consultados Onganía era “igual o peor” que el derrocado Illia. El análisis segmentado por clases sociales muestra que el régimen contaba con un pronunciado apoyo en las clases altas, motivado fundamentalmente en la valoración positiva de la “estabilidad económica”, aun cuando en ese mismo sector un 54 % se muestra insatisfecho con la situación económica, insatisfacción que alcanza al 80 % entre los encuestados de clase media y al 86% entre los obreros consultados. Respondieron que el gobierno no había hecho “Nada bueno” el 14, 41 y 80% de los consultados de clase alta, media y baja, respectivamente. Todo ello contribuye a fortalecer la idea del marcado carácter clasista del régimen, y de la existencia de una oposición obrera muy amplia, aun cuando la conflictividad social no se había manifestado con toda su virulencia en aquel momento.

La integración de científicos sociales a elencos estatales durante la “Revolución Argentina”

De modo simultáneo al proceso de desarrollo de las encuestas de opinión y a su incorporación por parte de agencias estatales, conocemos la trayectoria de los profesionales de las ciencias sociales que se incorporaron al Estado durante el régimen de Onganía, menos por sus competencias técnicas que por su afinidad política. En la primera mitad de los años sesenta, algunos sociólogos se habían incorporado a organismos estatales —como el Consejo Nacional de Desarrollo— o articularon su actividad en la universidad con la acción de agencias estatales como el INTA (Agulla *et al.*, 1966).

Con el golpe militar de 1966 y la intervención a las universidades, buena parte de los sociólogos fueron expulsados de sus cátedras o decidieron renunciar a sus posiciones académicas:

De 28 profesores del Departamento de Sociología de Filosofía y Letras (UNBA), quedan 4 en marzo de 1967. El Instituto de Sociología, en el que había 15 proyectos de investigación en marcha, cerró sus puertas por casi

⁴ *Primera Plana*, 25/6 al 1º/7/1968, Buenos Aires, año VI, n° 287, pp. 20-22.

un año [...] En la Universidad Católica Argentina (UCA) una declaración que rechazó la violencia desatada en la Universidad Nacional condujo a una crisis entre el rectorado y el departamento de sociología. Su director, José E. Miguens, y 33 docentes y auxiliares renunciaron hasta marzo de 1967, quedando 5 personas [...] También se interrumpieron las actividades de los sociólogos en el Instituto de Sociología de la Universidad del Litoral y Tucumán (Kratochwil, 1969, citado en Rubinich, 2017: 56).

Un sector de los científicos sociales se opuso al régimen militar y participó activamente de actividades contestatarias y, en algunos casos, participaron de procesos de radicalización política. En otros casos, en cambio, un número significativo de sociólogos, politólogos, economistas, abogados y otros profesionales se sumarán a la experiencia de la “Revolución Argentina” en distintas posiciones: como militantes, en universidades y *think tanks*, y ocupando cargos en el Estado. Entre ellos se destacaron especialmente los individuos insertos en redes y organizaciones del catolicismo de derecha argentino, que formaron parte del proyecto de modernización autoritaria del onganiano (Giorgi, 2010: 54; Zanca, 2006, cap. 4; Blois, 2018: 117-127).⁵

Probablemente, uno de los casos más notorios sea el de José Luis de Imaz, quien se incorporó por un período breve como funcionario de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Mario Díaz Colodrero, para instrumentar políticas comunitaristas, en una breve experiencia finalizada cuando el Cordobazo de mayo de 1969 provocó la renuncia de todo el gabinete de Onganía.⁶ Más allá de este breve paso por la función pública, su tesis acerca de la ausencia de una élite dirigente en la Argentina y su propuesta de que la Iglesia sería el factor aglutinador para construirla sería gravitante a lo largo de los años de Onganía (De Imaz, 1964; Giorgi, 2010).

⁵ Vicente (2017) ha señalado que lejos de las dinámicas que fueron llevando a sacerdotes, militantes e intelectuales católicos hacia posiciones en “la constelación tercermundista” como en grupos integristas de posturas cada vez más reaccionarias, el grupo nucleado en *Criterio* se distinguió por el claro impacto que sobre sus figuras tuvo la modernización cultural y académica tanto internacional como local.

⁶ José Luis De Imaz fue discípulo de Germani. Nacido en 1928, desde joven adhirió al nacionalismo católico. Cursó sus estudios secundarios en un colegio de la más alta elite, y tras recibirse de abogado en la UBA, cursó estudios de posgrado en la España franquista. Desde 1954 se volcó a la sociología. En 1958 defendió su tesis doctoral y en 1959 integró la primera camada de becarios de Conicet. En 1966 se incorporó al Conicet como investigador y comenzó a desempeñarse como profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina (Giorgi, 2014 y 2016).

Guido Giorgi (2016) ha estudiado al respecto la trayectoria de Miguens, una de las figuras que aunó sus competencias profesionales con su participación en la vida política. Profesor de Sociología en el curso de coroneles de la Escuela Superior de Guerra desde 1958, se unió al bando legalista –los llamados “Azules”– en el conflicto interno del Ejército, en 1962. Se sumó en esa coyuntura a la sección de Acción Psicológica y redactó, aprovechando su experticia como sociólogo de la opinión, los comunicados de esa facción que se emitían por radio. Desde 1966 se desempeñó como asesor de algunos militares entre los que asumieron el gobierno, y desde 1968 participó de un grupo de trabajo interdisciplinario, con una fuerte presencia de especialistas en ciencias sociales de pertenencia católica, en la órbita del Consejo de Seguridad Nacional, que redactó los *Lineamientos de un nuevo proyecto nacional* (Conade-Conase, 1970). Este libro se presentaba como un diagnóstico de la crisis argentina y ofrecía artículos de especialistas en distintas áreas (Educación, Ciencia y Técnica, Política Internacional, entre otras). Miguens redactó el capítulo del área social, en el que destacó el rol de la opinión pública. A lo largo de estos años, Miguens realizaría, además, tareas de consultoría para distintas áreas del gobierno.

Más allá de estas figuras, es preciso avanzar en el conocimiento de los sujetos de mucha menor visibilidad que contribuyeron a la introducción de las ciencias sociales empíricas como un instrumento empleado por el Estado. Un ejemplo en este sentido es el de Adolfo Antonio Critto, estudiado por Florencia Osuna (2017). Critto estaba ligado a los sociólogos católicos de la UCA, era abogado (Universidad Nacional de Tucumán), magíster en Política Social (Institute of Social Studies, Holanda) y doctor en Sociología (Universidad de Columbia, con una beca del programa de la fundación Eisenhower Exchange Fellowships). En 1963, cuando regresó a la Argentina, su formación especializada en métodos cuantitativos de investigación social le permitió acceder a las cátedras de Psicología Social y Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Grisendi, 2014).⁷

⁷ Critto realizó una investigación en el marco del Instituto de Sociología (UNC) en la que se concentró en el trabajo de campo en un barrio popular de la ciudad: Maldonado. Allí, investigó sobre las condiciones sociales de la construcción del “curanderismo” y de fenómenos similares en el impacto de la salud pública. Luego, dirigió un estudio sobre movilidad social y estructura ocupacional en un sector urbano de Córdoba, en el que rastreó las “disposiciones sociales al cambio” en variados grupos sociales. Luego, realizó la reconstrucción de las poblaciones de una “zona deprimida” socialmente de Córdoba, en torno a las ciudades de Cruz del Eje y Dean Funes. Mostró cómo estas áreas carecían de un “cambio social verdadero” y adjudicó a su aislamiento las razones de su atraso o “subdesarrollo”.

Durante cuatro años, Critto se desempeñó como funcionario del “onganiato” y ocupó los cargos de subsecretario de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (1967-1968), asesor del ministro de Bienestar Social de la Nación (1968-1969), asesor del Conade (1969-1970) y jefe del Departamento de Asuntos Sociales del Consejo Federal de Inversiones (1970).

La encuesta santafesina

Aunque es sabido, a través de diversos indicios, que tanto la dictadura militar instaurada en 1966 cuanto la que tomó el poder una década más tarde emplearon diversos instrumentos para auscultar la opinión pública, es poco lo que sabemos al respecto como para que nos permita dar marco al caso que aquí analizamos. Contamos con incipientes trabajos que se basan en fragmentos de estudios sobre la opinión pública desarrollados por agencias estatales. Uno de ellos es el estudio sobre la encuesta desarrollada a fines de 1976 en la provincia de Tucumán, que –pese a las dificultades para su abordaje, pues el material al que se logró acceder resulta incompleto– muestra altos niveles de aceptación del régimen militar y, a la vez, mayores porcentajes de adhesión cuanto más alto se ubicaban los entrevistados en la escala social (Crenzel, 2009/2010). El segundo es el análisis de las encuestas de opinión desplegadas en 1981 durante la presidencia *de facto* del general Viola, realizado por Julia Risler y Laura Schenquer (2017). Se trata de materiales producidos por tres agencias estatales: la Secretaría de Información Pública dependiente de la Junta Militar, el Ministerio del Interior y la SIDE, que, en la hipótesis de las autoras, sirvieron para medir el clima social con el propósito de utilizar esa información para el diseño de campañas de propaganda y de comunicación mediante las que se buscó modelar o conducir a la población siguiendo estrategias de acción psicológica.⁸

⁸ Los informes sobre la situación psicosocial elaborados a partir de esas encuestas y sondeos mostraban que, pese a existir una oposición al régimen cercana al 58%, el apoyo personal a la gestión presidencial del general Viola era más favorable que adversa. Dado que el Estado intentó influir y moldear las orientaciones de la población, resultan sumamente relevantes los recientes aportes sobre las estrategias y prácticas de acción psicológica que se desplegaron sobre la población a lo largo de la existencia de dicho régimen (Risler, 2015; Aguila, 2014). También resultan incipientes, aunque cuentan con apoyos empíricos más sistemáticos, los trabajos que estudian a la opinión pública de Brasil frente a la dictadura militar. Se puede consultar al respecto a Patto Sa Motta (2014). El artículo analiza los sondeos de opinión realizados por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) con el objetivo de evaluar el apoyo al golpe y a la dictadura. Los datos señalan un contraste entre el apoyo previo a João Goulart y los números recogidos después

Los trabajos que han dado cuenta de la producción de un conocimiento social sobre la Argentina y de su empleo en ámbitos estatales (Neiburg y Plotkin, 2004; Morresi y Vommaro, 2012) no han reparado de modo sistemático en el vínculo entre la modernización de las ciencias sociales argentinas y el empleo de sus procedimientos y saberes por el Estado en etapas dictatoriales. El caso que aquí consideramos muestra la evidencia de un uso instrumental de las ciencias sociales por parte de agencias estatales en el marco de un régimen dictatorial, que combinaba perspectivas conservadoras y comunitaristas, y prácticas altamente represivas, con utopías modernizadoras de la sociedad y del Estado que, podemos hipotetizar, contribuyen a explicar la acogida de las modernas técnicas de recolección de datos. Con sus clivajes internos entre civiles y militares, liberales y nacionalistas, socialcristianos y tecnócratas, el régimen instaurado en 1966 hizo de la idea del desarrollo y la modernización del país un objetivo común que orientó tanto su acción como su utopía reaccionaria de la erradicación de la política (Osuna, 2017: 74 y ss.).⁹

El expediente que usamos como fuente da cuenta de la voluntad de desarrollar una gran encuesta nacional en 1971, bajo la dirección de un “Sistema Oficial de Encuestas de Opinión Pública”. La encuesta, realizada en Santa Fe y Rosario, resulta un estudio piloto previo, que probablemente se sumó a otros trabajos preliminares en otras regiones. No sabemos si, finalmente, la encuesta nacional se pudo desarrollar, ni nada conocemos todavía de los impulsores de esta iniciativa estatal ni de los funcionarios involucrados en su desarrollo. Sin embargo, podemos reconstruir buena parte de la lógica de la generación de este instrumento y de las intenciones de los que lo impulsaron. No se trataba de una encuesta destinada a ser difundida públicamente, aunque eso no la libraba de la parcialidad y de los aspectos manipulatorios de aquellas orientadas a tales fines. En esta encuesta, como en todas, no pueden dejar de tener lugar los intereses personales, políticos o de otra índole de sus orientadores e impulsores, intere-

de la victoria golpista, que indican la buena aceptación de las medidas autoritarias. El análisis de los registros insinúa que el apoyo al régimen autoritario se caracterizó por la inestabilidad y fluctuó durante los primeros años.

⁹ Simultáneamente, tras la feroz represión de 1966, a medida que avanzaba la década, crecerían las instituciones que ofertaban la carrera de Sociología y la cantidad de alumnos: “En 1969 alrededor de 4000 estudiantes (aproximadamente el 1,6% del total de estudiantes universitarios) sigue la carrera de Sociología en nueve lugares; tres universidades agrupan aproximadamente el 90% del alumnado. El resto concurre a las instituciones que iniciaron sus actividades luego de 1966. A estos lugares de grado se les debe agregar el posgrado de “las escuelas de sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba” (Kratochwil, 1969, citado en Rubinich, 2017: 52).

sados en apoyar a una u otra facción o en fortalecer una salida determinada en un escenario político muy complejo.

El documento preveía que las finalidades y objetivos de la encuesta se realizarían bajo la guía y centralización de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El cronograma establecía que se desarrollarían diversas encuestas y trabajos entre 1971 y 1974. Se preveía que el Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se encargaría de elaborar los indicadores sociológicos en septiembre de 1971, y la sección metodológica del documento expresaba la búsqueda de garantizar la representatividad geográfica con la administración de la muestra en ciudades de distintas dimensiones.¹⁰ El Instituto de Sociología había sido dirigido hasta 1966 por Héctor Bonaparte. Tras la renuncia en masa de sus investigadores como resultado del golpe de junio de ese año, el Instituto pasó a ser orientado por el decano interventor de la Facultad de Filosofía –primero de la Universidad Nacional del Litoral y luego de la Universidad Nacional de Rosario– el filósofo tomista y sociólogo Roberto José Brie.¹¹ En 1971, Brie seguía desempeñándose en el Instituto de Sociología, mientras el decano de la facultad rosarina era el profesor de Letras Luis Arturo Castellanos, a quien acompañaba como secretario Académico el pedagogo Ricardo Pedro Bruera, quien a lo largo de la dictadura inaugurada en 1966 se desempeñó en distintos cargos en el Ministerio de Educación, para asumir como ministro de esa cartera con la dictadura de 1976.¹²

Según la SIDE, la finalidad de la encuesta era:

- Captar la actitud mental ante los problemas nacionales y regionales.
- Proyección de conductas frente a alternativas sugeridas.
- Medir la influencia de los distintos medios de difusión y comunicación en cada uno de los públicos.

¹⁰ En la metodología propuesta se preveía administrar la muestra del siguiente modo: Capital Federal y Gran Buenos Aires: 6.000 casos; Rosario y Córdoba: 850 casos; Tucumán, Resistencia, Posadas, Salta, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia: 400 casos; Catamarca, Esquina, Mercedes y Santa Rosa: 100 casos.

¹¹ Entrevista a Elida Sonsogni, Rosario, 11 de septiembre de 2018. Sobre la trayectoria de Brie, ver Rodríguez (2016).

¹² Agradezco la información sobre las autoridades de la Facultad a la doctora Laura Luciani. Sobre la trayectoria de Bruera, ver Rodríguez (2011). En 1971 se editaron una serie de trabajos de investigación bajo el título de *Documentos de Trabajo del Instituto de Sociología de la UNR*. Entre los autores de esos textos se encontraban Roberto Brie, Sonia Bengoechea, D. Maquirrian, C. Boasso y A. Fernández. Agradezco esta información a la profesora Anahí Pagnoni, de la UNR.

A estas finalidades se sumarían otras, que se estimaba que proveerían la Presidencia de la Nación, los ministerios de Bienestar Social, de Hacienda y Finanzas, del Interior, de Defensa, de Cultura y Educación, de Trabajo; el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Desarrollo. De esas finalidades se derivaban objetivos a investigar que fijarían los distintos organismos teniendo en cuenta los siguientes objetivos tentativos postulados por la SIDE:

- Determinar los problemas que crean o pueden crear apoyo a la subversión.
- Detectar el gradiente de apoyo popular a la salida electoral.
- Detectar el porcentaje de influencia del factor económico sobre lo social, cultural y político.
- Detectar cuáles son las necesidades según la opinión pública, en obras y gestiones de gobierno.
- Conocer las tendencias regionales ante el regreso de Perón y a una fórmula encabezada por él.
- Conocer la opinión pública ante la alternativa de ampliar el plazo de la entrega a un gobierno constitucional de 3 a 5 años.
- Conocer las preferencias hacia un determinado partido político o plataforma política.
- Conocer la audiencia de los distintos medios de comunicación en las diferentes ciudades a encuestar, en qué forma impactan en los distintos públicos la publicidad o propaganda y cuáles son los medios más efectivos; y detectar cómo se informa el público del interior del país acerca de los problemas nacionales.

El cuestionario final se formularía en función de los requerimientos de los distintos organismos. El orden de las preguntas, su elaboración y la elección de las respuestas estaría “a cargo del equipo asesor compuesto por sociólogos, sicólogos, doctor en ciencias políticas, sociólogo prospectivo, doctores en ciencias económicas, estadísticos, matemáticos y abogado especialista en derecho laboral”. Una vez confeccionado el cuestionario, que tendría 45 preguntas, el Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Rosario realizaría el trabajo de estructurar los indicadores sociológicos por edad, sexo, grupo familiar, ingresos, vivienda, escolaridad, profesión, educación y otras variables. En relación con el muestreo, el documento sostiene: “Dada la importancia de esta parte de la encuesta, la misma se encomendará a un equipo dirigido por

la profesora titular de la materia Teoría de las Muestras de la única escuela de estadística que funciona en el país”.

Como se puede apreciar, la presencia de profesionales de las ciencias sociales, de académicos y de institutos universitarios en este plan de trabajo no deja duda alguna acerca de la aceptación, por parte de las agencias del Estado dictatorial involucradas, de los métodos provistos por la modernizada sociología argentina, y de la disposición de algunos intelectuales de sumarse a esta iniciativa estatal.

La encuesta fue realizada por una empresa privada, el “Servicio de Encuestas de Opinión Pública” con sede en Rosario, para el Servicio de Informaciones del Estado. La encuesta piloto se ejecutó sobre la base del muestreo 1/1000 en Rosario y 1/580 en Santa Fe. En ambos casos, se tomó como referencia para la representatividad de la muestra la aplicación según las secciones electorales de ambas ciudades. En Rosario, considerando una población de 705.000 habitantes según el censo 1970 y con un muestreo de 1:1000, se debían tomar 705 entrevistas personales, y en la ciudad de Santa Fe, considerando una población de 231.000 habitantes, se debían realizar 396 entrevistas para obtener una muestra representativa según la relación 1:580. Finalmente, fueron sometidas a muestra 707 personas en Rosario (356 varones y 351 mujeres) y 392 en Santa Fe (154 varones y 244 mujeres). El margen de error para Rosario fue de 1,87% y para Santa Fe del 1,45%.

La encuesta se administró entre los días 18 y 22 de junio de 1970 en Rosario y entre los días 25 y 31 de junio en Santa Fe capital. La precisión cronológica es aquí clave: el 1° de junio de 1970 la organización Montoneros mató al expresidente *de facto* Pedro Eugenio Aramburu, lo que no solo colocó en el primer plano el debate sobre la violencia política, sino que precipitó además una crisis que dio como resultado el desplazamiento de la presidencia del general Onganía y su reemplazo por el general Levingston, el día 8 de junio.

El cuestionario constaba de 33 preguntas. Muchas se centraban en la situación económica y otras, en la vida política, en particular en la valoración del régimen y de la protesta política y social.¹³ En un apartado que solo lleva el

¹³ Presentamos como ejemplos siete preguntas que resultan particularmente significativas:

13: ¿Considera que vive bien actualmente o debería vivir mejor?

16: ¿Cuándo considera que debe hacerse un llamado a elecciones?: Enseguida, en un año, en dos años, en 3, en 5, de 5 a 10, cuando se den las condiciones, más de 10 años, nunca

19: ¿Opina Ud. que la acción de las Fuerzas del orden en contra de la subversión es excesiva o débil? Excesiva- débil-correcta

25: ¿Qué opina sobre la conducta estudiantil en la ocupación de las casas de estudio? Es repudiable – es oportuna – representa descontento y es justa – es buena

título de “Encuesta piloto”, pero con la leyenda “reservado”, se presentan más de 120 objetivos de la encuesta, desgranados en 45 elementos económicos, 35 políticos y 44 sociales.

Entre ellos, resulta pertinente destacar los siguientes objetivos, que son los que ayudan de manera más clara a comprender las opiniones frente al régimen militar y a sus opositores: pulsar la reacción estudiantil por las versiones sobre desnacionalización de empresas y la falta de apoyo a la Universidad estatal por parte del gobierno; considerar si el público opina que vive bien actualmente, constatar las principales críticas a la conducción económica, consideración sobre los partidos políticos que aumentan su caudal, predicamento y prestigio en el ámbito político, considerar la posibilidad de sistemas corporativistas (representación laboral o gremial) en reemplazo de los partidos políticos, considerar la aceptación del régimen de facto, analizar la imagen de autoridad de las Fuerzas de Seguridad ante la opinión pública, dar cuenta de la repercusión de la actitud de enfrentamiento de un sector de la Iglesia, considerar la repercusión social de la pérdida del poder de la autoridad como consecuencia de los recientemente ocurridos Cordobazo y Rosariazo, “consideración sobre el grado de apoyo a las actividades subversivas de índole estudiantil-gremial”, por parte de diversos sectores, comprobar en qué forma es incrementada la proporción de sacerdotes adeptos al “Tercer Mundo” o “progresistas”, considerar la posibilidad de ubicar a los grupos más virulentos “del sector que propicia la violencia y el acceso de las masas al poder”, tratar de pulsar las actividades y repercusión efectiva del accionar de los sacerdotes tercermundistas, considerar el apoyo activo y pasivo de los sectores populares a los hechos de violencia y “comprobar la imagen popular de los movimientos subversivos”. Probablemente, debido a que los objetivos se redactaron con anterioridad al asesinato de Aramburu, no hay entre ellos referencias a ese acontecimiento ni a sus consecuencias en el recambio de los gobernantes al frente del régimen dictatorial.

No contamos en el material disponible con los resultados cuantitativos en bruto de la encuesta, sino con el análisis realizado por dos o más anónimos

27: ¿Cree Ud. o no que los sacerdotes del “Tercer Mundo” están vinculados con el comunismo?
Si – No

29: ¿Considera Ud. o no, que la violencia y los movimientos subversivos pueden traer alguna solución a los problemas del país? Ninguna solución- alguna solución – puede solucionarlo todo

32: ¿Cree Ud. o no que las Fuerzas de Seguridad están capacitadas para mantener el orden público ante cualquier eventualidad? Si – No

También se hacen preguntas de investigación de mercado, referidas a consumos de alcohol, tv, radio, diarios y revistas, pero el análisis de las respuestas no consta en el documento.

funcionarios, a los que no hemos podido identificar. A la vez, el grado de detalle y penetración del análisis es mayor en el caso de Rosario que en el de Santa Fe, ya que en este caso el análisis es más sucinto.

Aunque en la mayor parte de los casos las respuestas se distribuyen de una manera homogénea entre la población, en ocasiones resultan más claras las variables etaria y de género que las sociales, como criterios para agrupar las respuestas en conjuntos consistentes. A la vez, se observan matices regionales entre las respuestas de los habitantes de Santa Fe –más pequeña, burocrática y con fuerte peso de la Iglesia católica– y los de Rosario, ciudad tres veces mayor, con amplio desarrollo industrial y menor peso eclesiástico.

Las posiciones mayoritarias en ambas ciudades son de disconformidad con las políticas económicas del gobierno militar. Se trataba de unas políticas que habían favorecido la expansión de la infraestructura y de las inversiones directas de capital extranjero, y había disminuido la participación de los trabajadores en la apropiación de la riqueza nacional. Solo en un 6% de la muestra rosarina y un 4,7% de la santafesina consideraban que el control de precios de primera necesidad era adecuado. En respuesta a la pregunta “¿Considera que vive bien actualmente o debería vivir mejor?”, un tercio de las respuestas en el caso de Rosario y un 18,5% en el de Santa Fe señalaban cierta conformidad, menos del 5% en ambos casos decía vivir mal o muy mal, y un 66,5% en el caso de Rosario y un 77% en el de Santa Fe manifiestan la aspiración a vivir mejor.

Esa disconformidad se manifestaba también en el plano político. En el caso de Rosario, un 50% se manifestó a favor de un pronto llamado a elecciones, un 20,8% a favor de una convocatoria en el plazo de un año, un 9,8% en dos años, un 3,9 % en tres años, un 2,7% en un lapso de 5 a 10 años y un 12,7% para cuando estuvieran dadas las condiciones; hubo más respuestas femeninas a favor de elecciones prontas. Entre los santafesinos, un 45,5% se inclinaba por un inmediato llamado a elecciones; un 25% acordaba en que debían realizarse dentro de determinados plazos (la mitad de ellos en un año), la otra cuarta parte cuando se dieran condiciones favorables. Un sorprendente 4,4% –atribuido a sectores medios y bajos– se inclinaba por que nunca se realizaran elecciones. Si consideramos que la demanda de elecciones inmediatas o dentro de plazos breves puede considerarse un indicador de oposición al régimen militar, podemos ubicar dentro de esa clasificación a casi el 71% de los rosarinos y al 58% de los santafesinos.

Sin embargo, esta apreciación respecto al régimen militar no se transfería inmediatamente a la valoración de los elementos estrictamente represivos, como se deriva del análisis de las respuestas a la pregunta “¿Qué opina usted, la acción

de las Fuerzas del Orden contra la subversión es excesiva o débil?” En el caso de Rosario, el 58,2% de los encuestados manifestó que la acción represiva era excesiva, y entre ellos predominaba el grupo etario de 31 a 50 años. Quienes consideraban correcta la represión eran el 23,8% de los encuestados, entre los que predominan los mayores de 50 años. El grupo que califica como débil la represión es el 18%, con ligera superioridad masculina. Para el caso de la ciudad de Santa Fe, la opinión favorable a las fuerzas represivas abarca un 41,5% de los encuestados, con predominio femenino. A ellos se agregan las respuestas de quienes consideran que la acción de las fuerzas del orden era débil (24,6%). Quienes calificaban la represión como excesiva son el 33,9 % de los encuestados, con ligero predominio femenino. En el caso de las respuestas a esta pregunta en particular, para el caso de Santa Fe, los datos resultan muy confusos, ya que en distintas secciones del análisis de la encuesta se reiteran errores matemáticos e interpretaciones contradictorias. Pese a ello, observamos que en ambas ciudades existía una proporción considerable (más del 40% en Rosario y más del 60%, en Santa Fe) que avalaba la represión o la consideraba insuficiente, cifras que exceden en mucho al de aquellos grupos que avalaban al régimen en el poder.

La respuesta a la pregunta “¿Cree Ud. o no que las FF de seguridad están capacitadas para mantener el orden público ante cualquier eventualidad?”, que entendemos permite valorar la opinión sobre las capacidades profesionales de militares y policías, muestra sin embargo resultados poco consistentes en relación con el aspecto anterior, especialmente en el caso de Rosario, en el que el 53,5% de las respuestas fueron positivas, mientras la respuesta aprobatoria en Santa Fe alcanzó un 60%.

¿Qué ocurre si observamos, en cambio, la actitud frente a los movimientos contestatarios? En relación con la pregunta sobre las ocupaciones de escuelas y universidades por parte de los estudiantes, una modalidad de creciente importancia en el período y que implica sin dudas la adopción de una postura de radical crítica al régimen y al sistema, en Rosario, un 47% de los encuestados manifestó su aprobación. Ese porcentaje incluye un 30,8% que manifestaba que esa práctica representaba descontento y era justa. Predominan en ese grupo las mujeres de 31 a 50 años y entre los varones el pico está en el rango etario de 18 a 30 años, y está muy representado el nivel educativo superior. En Santa Fe, un 51% acepta la conducta estudiantil (con amplio predominio femenino) y 41% lo consideran repudiable. Las respuestas a la pregunta por el vínculo entre los sacerdotes del Tercer Mundo y el comunismo resulta abrumadora: en Rosario un 74% y un 83% en Santa Fe desvinculaban a los sacerdotes tercermundistas

del comunismo, lo que implicaba en la coyuntura argentina de 1970 otorgarles una amplia legitimidad.

La pregunta sobre la valoración de la violencia revolucionaria se realizaba a través de una formulación de la pregunta que dista mucho de ser neutra: “¿Considera Ud o no que la violencia y los movimientos subversivos pueden traer alguna solución a los problemas del país?”¹⁴ Así y todo, en el caso de Rosario, las valoraciones positivas distan de resultar ínfimas. El análisis sostiene que el 75% de la población repele categóricamente los procedimientos violentos, pero que:

Las respuestas de tendencia negativa abarcan el otro cuarto de la población encuestada y solo un 2,5% evidencian una tesis de neto corte subversivo (puede solucionarlo todo), la que está integrada por un neto dominio de varones en su mayoría jóvenes. Este grupo en la escala de muestreo equivale a 13.000 personas y por los índices bajo en cuanto a cultura, niveles ocupacionales, ingresos y propiedad automotor pueden coincidir con la tipología de la población marginal de Rosario.

En el caso de Santa Fe, un 85% de los encuestados respondió que la violencia no podía traer ninguna solución y un 14,8% respondió que la violencia podía traer alguna solución a los problemas del país. Solo un 0,2% se inclinaba hacia la violencia como solución radical, grupo en el que predominaba el nivel educativo primario.

De este modo, el análisis de la encuesta muestra un ánimo predominantemente opositor al gobierno en las dos ciudades. Sin embargo, dentro de este talante general, la evaluación de los elementos económicos y políticos no resulta siempre congruente, mientras el repudio al régimen podía coexistir con una valoración positiva de las fuerzas represivas por porciones considerables de la población de ambas ciudades. De tal modo, y más allá de la subjetividad y hasta de la voluntad manipuladora de los analistas que redactaron los informes que dan cuenta de los resultados en ambas ciudades, la encuesta muestra la amplia heterogeneidad de las opiniones y la imposibilidad –aun para el caso de una dictadura en crisis– de reducir esta multiplicidad a categorías aprehensibles en esquemas dicotómicos.

¹⁴ El modo en que se interroga sobre la violencia, un valor negativo si se la presenta de manera aislada, y la recurrencia a un término de fuerte connotación negativa, como “subversivo”, se suman a una ligazón directa con la solución de los problemas del país que no toma en cuenta las múltiples mediaciones entre las prácticas de violencia revolucionaria y sus objetivos políticos de largo plazo.

Conclusiones

Las encuestas de opinión pública distan de ser instrumentos neutrales para el conocimiento del modo en que se configuran las subjetividades políticas de la población. Esto no se debe solamente a las críticas señaladas sobre la noción de “opinión pública”, ni al modo y contexto en que son formuladas las preguntas –cuestiones ambas señaladas anteriormente–, sino a que en su estructuración y desarrollo confluyen los métodos más sofisticados de las ciencias sociales con una variedad de intereses políticos, profesionales, sectoriales, que explican que se privilegie un aspecto u otro en sus interpretaciones y usos. Sin embargo, en este trabajo hemos considerado que, teniendo en cuenta dichos elementos, las encuestas resultan instrumentos necesarios y útiles para dar cuenta del estado de fragmentación de la opinión pública y, como tales, en fuentes que los historiadores podemos emplear con provecho para aproximarnos a tan elusivos fenómenos.

En nuestro trabajo hemos demostrado que las ciencias sociales argentinas y, en particular, las encuestas sobre la opinión pública fueron herramientas empleadas por agencias del Estado en un período dictatorial, matizando dos imágenes persistentes: la de unas ciencias sociales que se construyeron y desarrollaron básicamente en oposición a las dictaduras y la de un instrumento de indagación social que solo encontró su desarrollo en consonancia con la democracia. En este sentido, nuestro trabajo contribuye a mostrar el vínculo que se dio entre la modernización de las ciencias sociales y el empleo de sus procedimientos, métodos y resultados por parte de agencias del Estado en períodos dictatoriales. La encuesta aplicada en la provincia de Santa Fe en 1970 nos permite documentar de manera firme esta “voluntad de saber” de las agencias estatales en dictadura, su consecución a través de los métodos más modernos provistos por las ciencias sociales y el tejido de una trama que vinculó a esas agencias estatales con intelectuales y académicos.

La segunda constatación de este trabajo nos permite observar las transformaciones de la opinión pública frente a la llamada “Revolución Argentina”. Pese a que las fuentes con que contamos son fragmentarias y las encuestas se realizaron en distintas zonas geográficas, es posible advertir la evolución de la opinión desde un difuso apoyo mayoritario hasta una creciente oposición, y de la existencia de un marcado respaldo de las clases altas al régimen que se contrapone a un más amplio y creciente rechazo de los sectores medios y bajos, en consonancia con lo que señalan las diversas indagaciones historiográficas sobre el período.

Bibliografía

- Aguila, Gabriela (2014). “Disciplinamiento, control social y acción psicológica en la dictadura argentina. Una mirada a escala local. Rosario, 1976-1981”. *Revista Binacional Brasil-Argentina*, vol. 3, n° 1, junio.
- Agulla, Juan Carlos; Andújar, Gerardo y otros, (1966). *Del sociólogo y su compromiso*. Buenos Aires: Libera.
- Blanco, Alejandro (2006). *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Blois, Juan Pedro (2018). *Medio Siglo de Sociología en la Argentina. Ciencia, profesión y política (1957-2007)*. Buenos Aires: Eudeba.
- Bourdieu, Pierre (2000). “La opinión pública no existe”. En *Cuestiones de sociología*, Madrid: Akal.
- Consejo Nacional de Seguridad-Consejo Nacional de Desarrollo (1970). *Lineamientos para un nuevo proyecto Nacional*. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Crenzel, Emilio (2009/2010). “Una encuesta de opinión pública en Tucumán bajo la dictadura. Una aproximación indicial”. *Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos*, Tucumán, año VI, n° 7-8.
- Daniel, Claudia (2013). *Números públicos. Las estadísticas en Argentina (1990-2010)*. Buenos Aires: FCE.
- De Imaz, José Luis (1964). *Los que mandan*. Buenos Aires: Eudeba.
- Giorgi, Guido (2010). “Redes católicas y Estado en la Revolución Argentina”. *Ciencias Sociales y Religión*, Porto Alegre, año 12, n° 12, octubre. Disponible en <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CienciasSociaisReligiao/article/view/12646>
- (2014) “Refundar la sociedad. El comunitarismo como política de Estado en el gobierno de Onganía”. En Osuna, Florencia y Galván, Valeria (comps.), *Nuevas perspectivas para la investigación del gobierno de Juan Carlos Onganía*. Rosario: Prohistoria.
- (2016). “José Luis de Ímaz. Episodios de una trayectoria pública de Onganía a Béliz”. *Trayectorias de intelectuales en el Estado. Actas de jornadas de discusión*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Grisendi, Ezequiel (2014). “Del barrio a la región: Adolfo Critto y la investigación social aplicada en Córdoba (1963-1975)”. Actas de las VIII Jornadas de Sociología, diciembre de 2014, Universidad Nacional de La Plata.
- Morales, Juan (2013). “Entrecruzamientos en el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (1955-1965) y sus derivaciones: movilidad académica y Latin American Studies”. Primeras Jornadas de Sociología. “La sociología frente a los nuevos paradigmas en la construcción social y política”, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.
- Morresi, Sergio y Vommaro, Gabriel (comps.) (2012). *Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina*. Los Polvorines-Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo.
- Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comps.) (2004). *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina*. Paidós: Buenos Aires.
- O’Donnell, Guillermo (1996). *El Estado burocrático autoritario*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Osuna, Florencia (2017). *La intervención social del Estado. El Ministerio de Bienestar Social entre dos dictaduras. Argentina, 1966 -1983*. Rosario: Prohistoria.
- Patto Sá Motta, Rodrigo (2014). “O golpe de 1964 e a ditadura nas pesquisas de opinião”. *Tempo*, vol. 20.
- Risler, Julia (2015). *Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última dictadura argentina (1976-1983)*. Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Risler, Julia y Schenquer, Laura (2017). “Viola en los comienzos de la transición (1981). La utilización de encuestas y sondeos de opinión pública para la construcción de consenso”. Ponencia presentada en el Simposio Interdisciplinario Sobre Actores Políticos y Políticas Públicas en las Transiciones Democráticas, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL, 5 y 6 de Junio.
- Rodríguez, Laura Graciela (2011). *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983)*. Rosario: Prohistoria.

- (2016). “Elites académicas durante la última dictadura: sociólogos e investigadores enciencias sociales”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016, Ensenada, Argentina. En *Memoria Académica*. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8832/ev.8832.pdf
- Rubinich, Lucas (2017). “Los sociólogos intelectuales: cuatro notas sobre la sociología en los años 1960”. *e-l@tina*, vol. 15, n° 60, Buenos Aires, julio-septiembre.
- Shoai, Andrés (2011). “La estratificación social en los orígenes de las encuestas de opinión pública en Argentina”. IX Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en cgsa.aacademica.org/000-034/591.pdf
- Terán, Oscar (1991). *Nuestros años sesenta*. Buenos Aires: Punto Sur.
- Vicente, Martín (2017). “Un claro signo de los tiempos. Industrias culturales y teorías de la Comunicación Social en *Criterio*: sobre sociedad, cultura y política desde una clave modernizadora (1966-1973)”. IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión, “La institución como proceso”, Buenos Aires.
- Vommaro, Gabriel (2008). “*Lo que quiere la gente*”. *Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en la Argentina (1983-1999)*. Buenos Aires: Prometeo.
- Zanca, José (2006). *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, 1955-1966*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Zarowsky, Mariano (2016). “Nueva izquierda, sociología y medios de comunicación: itinerario de Heriberto Muraro en los años sesenta y setenta”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre, Ensenada, Argentina. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8888/ev.8888.pdf